



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

A24-064

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN AUTO.
Demandante: **MANUEL JOSE ORTIZ VALENCIA**
Demandados: **CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA**
CONINSA RAMON H S.A.
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP
Radicado No.: 05001-31-05-017-2023-00372-01.
Decisión: **REVOCA** auto que da por no contestada la demanda.

Link: [05001310501720230037201](https://expediente.tribunaljudicial.gov.co/05001310501720230037201) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por EPM contra la decisión mediante la cual se dio por no contestada la demanda.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 13** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

Pretende el demandante que tras declararse la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 8 de agosto de 2016 y el 30 de noviembre de 2022, fecha en que fue despedido sin justa causa, se condene a las entidades demandadas, que identifica como integrantes del consorcio para el cual laboró (CONSORCIO CCC ITUANGO), al reconocimiento y pago del faltante de ciertos haberes laborales en el monto que reseña (prima, cesantías, intereses, vacaciones); además de la indemnización por despido encontrándose en estado de

indefensión – art. 26 de la Ley 361 de 1997-, o subsidiariamente sin justa causa – art. 64 del CST-; la sanción moratoria y las costas del proceso.

Describe la función ejecutada (soldador), el horario cumplido, el salario pactado, las adiciones y modificaciones introducidas al contrato de trabajo primigenio, el accidente de trabajo sufrido, el contenido del comunicado a través del cual feneció el vínculo y la inexistencia de un permiso ante el Ministerio de Trabajo para retirarlo de la empresa

El 31 de octubre de 2023 se admitió la demanda, ordenando tener como canal digital de la demandada EPM el siguiente notificacionesjudicialesepm@epm.com.co (archivo 13).

Posteriormente, 07 de diciembre de 2023, se envió a dicha entidad la correspondiente notificación por aviso a entidades públicas conforme se aprecia en el archivo 16, oportunidad en la que se certificó lo siguiente:

Entregado: NOTIFICACION PROCESO ORDINARIO LABORAL RDO. 05001310501720230037200

Microsoft Outlook

<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@epmco.onmicrosoft.com>

Jue 07/12/2023 9:00

Para: notificacionesjudicialesepm@epm.com.co <notificacionesjudicialesepm@epm.com.co>

📎 1 archivos adjuntos (135 KB)

NOTIFICACION PROCESO ORDINARIO LABORAL RDO. 05001310501720230037200;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificacionesjudicialesepm@epm.com.co

Asunto: NOTIFICACION PROCESO ORDINARIO LABORAL RDO. 05001310501720230037200

En auto del 22 de febrero de 2024, la a quo dio por no contestada la demanda por parte de EPM, así (archivo 22):

Vencido el término del traslado de la demanda de la referencia, se tiene que las demandadas **CONSTRUCTORA CONCRETO S.A, CAMARGO CORREA INFRA LTDA. SUCURSAL COLOMBIA, y CONINSA RAMON H. S.A**, a través de apoderado judicial presentaron de manera oportuna y con observancia de las formalidades y menciones de que trata el artículo 31 del C.P.L., la contestación de la demanda, siendo procedente su admisión.

En cuanto a la demandada EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P, se tiene pese a que desde el día 07 de diciembre de 2023, se notificó al buzón electrónico establecido para notificaciones judiciales, esto es, notificacionesjudicialesepm@epm.com.co, recibiendo constancia de entrega (Archivo 16 del expediente); y no se allegó respuesta alguna, por lo cual se da por NO CONSTADA LA DEMANDA. Se adosan capturas de pantalla sobre la constancia de notificación.

Contra dicha decisión la sociedad convocada a juicio interpuso y sustentó recurso de reposición y en subsidio apelación (archivo 23), el primero de ellos resuelto desfavorablemente, siendo remitido el expediente a esta corporación para surtirse la alzada.

2. ARGUMENTOS

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

Sostiene que el apoderado del actor le remitió varios correos a la entidad, así:

- ✓ Inicialmente el 18 de septiembre de 2023 con la demanda ordinaria anunciando que sería radicada ante los juzgados laborales de Medellín.
- ✓ El 29 del mismo mes y año, sin copia del auto que la inadmitía.
- ✓ El 4 y 13 de octubre de 2023 copia del memorial remitido al juzgado. El primero con la respuesta a un derecho de petición que elevó a EPM, el segundo con un ACUERDO DE CONSORCIO.

Posteriormente mediante auto del 22 de febrero de 2024 el despacho dio por no contestada la demanda. Ante ello indagaron con la persona encargada del manejo del buzón corporativo, quien señaló que *“El correo si llego, pero se le solicito al juzgado que lo enviara nuevamente ya que los adjuntos no permitían abrir y nos solicitaba un correo y al ingresar el de notificaciones judiciales salía error. El juzgado no nos lo devolvió con lo solicitado”*:

Que al NO tener conocimiento de las providencias respectivas, no es posible tenerla por notificada, aunado a que debía presumirse la buena fe.

Señala que si bien el juzgado muy diligentemente advirtió en el correo de notificación que: *“en caso de no poder visualizar los archivos compartidos o adjuntados; deberá acercarse dentro de los DOS (2) DÍAS siguientes al envío de este correo, a las instalaciones del Juzgado con un CD en blanco, para grabarles los respectivos archivos”*, lo cierto es que dicha exigencia no estaba contenida en las reglas de notificación a entidades públicas estipuladas en el art. 41 del CPT y la SS y el art. 8 de la Ley 2213 de 2022, normas de orden público que en ningún caso podían ser modificadas.

En el panorama descrito, considera que la imposibilidad de abrir la providencia, vulnera el principio constitucional de publicidad, además del acceso a la administración de justicia, debido proceso y derecho de defensa.

Insiste que tuvo acceso al mensaje de texto inserto en el correo electrónico, pero NO fue posible conocer el contenido de las providencias adjuntas, aunque exista una constancia de entrega, aspecto en el que debía tenerse en cuenta lo señalado en el Código General del Proceso según el cual *“las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales”*. Entonces, con la prueba del correo que se reenvió solicitando remitir nuevamente las providencias, se acreditaba el no conocimiento de estas.

En concordancia con el inciso 5 del artículo 8 de la Ley 2213, manifiesta bajo la gravedad del juramento que no está enterada de las providencias dictadas en este proceso.

De esta manera solicita que nuevamente se efectúe la notificación a EPM permitiéndole conocer el auto que inadmitió y admitió la demanda, conforme lo estipulado en el parágrafo del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo o lo señalado en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022

2.2. DE LA JUEZ AL DECIDIR

Aduce tras la búsqueda exhaustiva en la bandeja de correo electrónico del despacho, NO encontró la solicitud elevada por EPM, presuntamente enviada el día 7 de diciembre de 2023 hora: 9:45. Que infructuosamente verificó el hilo del mensaje y además filtró la revisión con las direcciones epm@epm.com y notificacionesjudicialesepm@epm.com.co

Expresamente señaló que:

De igual modo, se advierte que, este Juzgado tiene habilitado en el buzón de correo electrónico una opción de respuesta automática para cada uno de los mensajes de datos que se remiten al correo electrónico, lo cual, permite acreditar que efectivamente un usuario remitió válidamente un mensaje de datos a este Juzgado; sin embargo, la parte recurrente, no aportó copia o captura de pantalla de la respuesta automática que le debió llegar el 07 de diciembre de 2023, al momento de remitir el mensaje de datos donde solicitaba el reenvío de los archivos adjuntos a la notificación personal.

Seguidamente, revisado de nuevo el proceso de la referencia, observa el Despacho que el 31 de octubre de 2023 se admitió la demanda, la cual fue notificada de forma personal a la codemandada EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P, al correo electrónico: notificacionesjudicialesepm@epm.com.co, dirección electrónica de la cual se recibió confirmación de la recepción efectiva por parte de la herramienta colaborativa de Microsoft Office 365 que ha sido provista a los servidores judiciales y que incluye el servicio de confirmación de entrega, como consta en el archivo 16 del expediente.

Ahora bien, respecto del acta de notificación personal, en efecto, en la misma, se indicó "(...) Se advierte que en caso de no poder visualizar los archivos compartidos o adjuntos; deberá acercarse dentro de los DOS (2) DIAS siguientes al envío de este correo, a las instalaciones del Juzgado con un CD en blanco, para grabarles los respectivos archivos (...)" ; sin embargo, no se observa acreditado en el plenario que la codemandada EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P, hubiese acudido a la sede del Despacho con el fin de obtener copia de los archivos remitidos, ante las dificultades que aduce haber presentado en cuanto a la visualización de los documentos adjuntos en el acto notificadorio, pues se recuerda que, entre los deberes de las partes en juicio, se encuentran: colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, acudiendo al Juzgado cuando así se requiera, y adoptar las medidas para conservar en su poder las pruebas y la información contenida en mensajes de datos que tengan relación con el proceso (Art. 95 núm. 7 de la Constitución Política, en concordancia con el art. 78 del C.G.P, y el inciso final del art. 3 de la Ley 2213 de 2022).

En este sentir, no se advierte indebida notificación a la demandada EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P, del auto admisorio de la demanda, pues acorde con la constancia de notificación visible en el archivo 16 del expediente digital, se evidencia que la demandada fue notificada en los términos que ordena la ley, es decir, de manera personal, en tanto que: 1. Se notificó en la dirección electrónica dispuesta para recepción de notificaciones judiciales; 2. Se recibió acuso de recibido con el cual pudo constatar el acceso del destinatario al mensaje, y 3. Junto con la notificación se adjuntó copia de la demanda, escrito de subsanación de requisitos, auto inadmisorio y auto admisorio de la demanda, además desde el mismo acto notificadorio, se advirtió que en caso de no poder visualizar los archivos compartidos o adjuntos; se acercará dentro de los DOS (2) DIAS siguientes al envío del correo, a las instalaciones del Juzgado con un CD en blanco, para grabarles los respectivos archivos, respetando de esta manera los derechos de defensa y contradicción de la referida codemandada. Adicionalmente como se indica expresamente por el apoderado de EMP, el tenía en su correo copia de la demanda, escrito de subsanación y de los memoriales remitidos por la parte, por lo que no puede atribuirle al despacho responsabilidades que le corresponden a la empresa.

Fue así como se negó a reponer la decisión.

2.3. ALEGATOS

Únicamente se pronunció EPM. Solicita tener en cuenta el razonamiento plasmado en la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil dentro del proceso judicial con radicado No. 05001310300220210036002, cuyos fragmentos cita, al analizar *"efectiva entrega de un mensaje de correo electrónico destinado al correo institucional de una sede judicial"*, y del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante providencia del 12 de marzo de 2024, radicado 11001319900120220615001, donde estudió un caso en que el demandante, con la finalidad de

acreditar la notificación personal del demandado, solo presentó una captura de pantalla de la remisión del correo electrónico.

3. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 1° del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada*. Tenemos entonces que EPM ESP manifiesta su descontento con la decisión adoptada por el despacho, insistiendo que tras la *notificación* surtida el 7 de diciembre de 2023, cuando el juzgado remitió a su dirección electrónica el correo contentivo de algunas piezas procesales, minutos después solicitó su re-envío dado que los adjuntos no se dejaban abrir, y al no recibir ninguna respuesta, NO podía perfeccionarse dicho acto, mucho menos dar por no contestada la demanda, pues a hoy ni siquiera tenía conocimiento del auto a través del cual se admitió la misma.

Obsérvese folio 48 del archivo 23, contentivo del correo electrónico que fundamenta su súplica, y consecuentemente el recurso de alzada, así:

De:

Buzon Corporativo EPM <epm@epm.com.co> en nombre de Notificaciones Judiciales EPM <notificacionesjudicialesEPM@epm.com.co>

Enviado el:

jueves, 7 de diciembre de 2023 9:45

Para:

Juzgado 17 Laboral Circuito - Antioquia - Medellín

Asunto:

RE: NOTIFICACION PROCESO ORDINARIO LABORAL RDO. 05001310501720230037200

Buen día,

Los documentos adjuntos no dejan abrir, por favor enviarlos nuevamente en formato PDF para el tramite adecuado

Quedamos atento s

Feliz día

De:

Juzgado 17 Laboral Circuito - Antioquia - Medellín <j17labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el:

jueves, 7 de diciembre de 2023 9:00 a. m.

Para:

Notificaciones Judiciales EPM <notificacionesjudicialesEPM@epm.com.co>

Asunto:

NOTIFICACION PROCESO ORDINARIO LABORAL RDO. 05001310501720230037200

Importancia:

Alta

¡Cuidado! este correo proviene de un usuario externo, no abras archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces sin validar que el remitente y el contenido sean seguros. **Nunca entregues tu usuario ni contraseñas a través de enlaces.**

[12Auto 3.pdf](#)

[4SUBSANACIONDEMANDA 3.pdf](#)

[3AUTOINADMISION 8.pdf](#)

[2DEMANDAANEXOS 10.pdf](#)

Advierte que una postura contraria, es decir, que valide la notificación pese a no tener acceso al expediente, vulneraría el debido proceso.

Este derecho de carácter fundamental debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra, indicando entre otros conceptos que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es por ello que las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos. Esta obligación también cubre a las autoridades públicas, las cuales quedan obligadas por las normas que regulan el juicio o la actuación, sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los benefician y desconocer o ignorar aquellos que les sean desfavorables.

De conformidad con lo anterior, el debido proceso se vulnera cuando no se siguen los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos, en otras palabras, las *formas propias de cada juicio*, forma que para el caso está contemplada en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 *por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones*, norma cuyo tenor es:

NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 y 138 del Código General del Proceso.

PARÁGRAFO 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.

PARÁGRAFO 2o. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales.

PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal (UPU) con cargo a la franquicia postal.

(Subrayas y resaltos de la Sala)

Nótese como se sumó a la conocida notificación personal de que trata el art. 41 del CPT y la SS, la posibilidad de notificar electrónicamente al demandado, evento en el cual, por tratarse de una persona jurídica, NO sólo debe demostrarse el envío del mensaje de datos al e-mail registrado para efecto de notificaciones, lo que realmente sucedió, sino además el envío de la providencia respectiva. Así lo determinó el legislador, y justamente en este punto estriba la controversia.

Destáquese además como en dicha preceptiva se previó que ante una *discrepancia sobre la forma* en que se practicó la notificación, la parte afectada podría solicitar la nulidad de lo actuado con apego a lo dispuesto en el Código General del Proceso.

Y es que el mandato constitucional atiente al debido proceso se materializa, entre otras formas, a través de lo dispuesto en el art. 133 ibídem, (aplicable en todos aquellos asuntos no regulados expresamente en materia laboral), disposición que taxativamente enlista los casos en los cuales es dable declarar una nulidad. Incluso el numeral octavo del artículo en mención, considera que el proceso es nulo en todo o en parte, cuando NO se practica en legal forma la notificación del auto que admite la demanda. La norma es del siguiente tenor:

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, **que deban ser citadas como partes**, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (Resaltos de la Sala)

Sobre la notificación judicial, la Corte Constitucional en Sentencia C-783 de 2004 señaló:

“Conforme a la doctrina jurídica, la notificación judicial es un acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las

decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las **formalidades señaladas en las normas legales**.

“En virtud de esta función, dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior.

“Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta razón, el mismo constituye un elemento básico del debido proceso previsto en el Art. 29 de la Constitución.”.

En efecto, para garantizar la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, es necesario que las personas sean enteradas sobre las diferentes actuaciones que se surten al interior del proceso.

En este orden de ideas, la vinculación de un demandado al proceso demarca el momento en que se traba la relación jurídico-procesal, tornándose de vital importancia que su notificación se ajuste a la formalidad prevista en la ley. Una **irregularidad** o vicio en el cumplimiento de los requisitos esenciales de este acto puede desembocar en una nulidad.

Y en precisamente una extraña irregularidad, por denominarlo de alguna manera, es lo que se aprecia en este caso, que tiene la virtualidad de derruir la eficacia de la notificación efectuada por el despacho aquel 7 de diciembre de 2023, pues aunque juiciosamente el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín realizó una búsqueda de aquel requerimiento de EPM (a través del cual solicitaba acceso a las piezas procesales que se estaban poniendo en su conocimiento), con resultados infructuosos y lo acredita a través de los hallazgos que refleja la bandeja de entrada (folio 3 archivo 24), lo cierto es que, para la Sala, NO es dable desatender ciegamente aquella falencia que se presentó en el medio tecnológico, menos aun, si precisamente es una herramienta avalada por el legislador para facilitar la comunicación de la existencia de un proceso a la contraparte.

Inclinar la balanza en favor de los intereses del recurrente, atendería el espíritu de la norma procesal, que por su naturaleza es de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales y los sujetos procesales, pues se estaría privilegiando la utilización de canales digitales en todas las actuaciones (dado que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social presentaba limitaciones pues NO regulaba lo relacionado con las notificaciones electrónicas), pero sin soslayar ninguna garantía de la parte, máxime si se es latente la discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación. Precisamente la parte afectada manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se enteró de la providencia, acreditándolo sumariamente, pues ninguna

solicitud hubiese elevado, a pocos minutos de recibir el correo, si hubiese tenido acceso a los archivos.

NO se trata de un descuido de la parte que NO revisó el correo y pasó inadvertido el mensaje a través del cual fue notificado, hipotética situación que NO se podría equiparar a una discrepancia sobre la *forma*; bajo esa óptica, para efectos de retrotraer el proceso, bastaría que cualquiera lanzara dicha afirmación bajo la gravedad de juramento para invalidar la notificación, pensamiento que no puede estar más alejado del querer del legislador, quien por el contrario, de acuerdo a principios como la economía procesal, celeridad y eficacia, ideó una manera sencilla de poner en conocimiento de la contraparte la existencia de una demanda en aras de NO paralizar el trámite dado el impacto de la pandemia en la administración de justicia, propendiendo además por la materialización del derecho de defensa, cuyos resultados favorables permitieron acoger de manera permanente la utilización de medios tecnológicos que eventualmente pueden generar errores de comunicación, como el que aquí se aprecia.

Muy seguramente, de alertarse oportunamente el despacho sobre el inconveniente de EPM para visualizar archivos, hubiese tomado medidas alternas para permitirle el acceso al expediente y/o las piezas procesales pertinentes. Empero, se insiste, por razones que desconoce la Sala, el email remitido por la entidad convocada a juicio, no fue recibido por el despacho, de ahí que no generó la respuesta automática cuya existencia echa de menos la juez, inconveniente logístico que en atención a las razones que preceden, NO puede dar al traste con el derecho de defensa que le asiste a la entidad convocada a juicio, sin miramientos a la pasiva actitud al NO insistir posteriormente en la entrega del archivo.

Pero lo determinante en este punto es que las irregularidades que se presenten en el manejo cotidiano de una justicia digital, no necesariamente deben acarrear consecuencias adversas para la parte que erradamente considera que realizó la gestión a su cargo, pero que, por falencias técnicas, ajenas a su dominio, impiden su concreción. Fue este el razonamiento de la Sala de Casación Civil en la sentencia de radicación STC340-2021 cuando en caso donde cobraba relevancia la diferencia horaria entre el pantallazo aportado por la parte donde remitía un memorial, de cara al disímil en que lo recibió el despacho, estimó que:

Al respecto, resulta oportuno destacar que en recientes pronunciamientos, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, de cara al acceso a la administración de justicia; es más, en un caso con alguna simetría al acá auscultado, que *mutatis mutandis* resulta aplicable al presente, se consideró:

(...) De manera tal que en la actualidad es innegable que las partes, terceros y servidores «judiciales» interactúan con apoyo de las TIC, al punto que está permitido que aquellas cumplan algunas cargas procesales por el mismo conducto siempre que sea posible y resulte menester para promover o proseguir sus contiendas, pues no se olvide que las «cargas procesales emanan de la ley y su propósito es procurar la colaboración de las partes dentro del proceso, en aras de que realicen actuaciones que redundan en su beneficio, que de no cumplirlas, traen consecuencias adversas para quienes se les imponen» (CSJ AC7553-2014).

(...) es factible que durante el proceso comunicacional se presenten situaciones que hagan creer al remitente que el mensaje de datos fue enviado, pero no llegó al buzón destinatario. Evento en el cual el juzgador debe establecer, de cara a la evidencia recopilada y a las particularidades del caso, si la causa de la falencia técnica escapa de la órbita de manejo y alcance del ciudadano, ya que si realizó las gestiones a su cargo en aras de «remitir los memoriales» por correo electrónico sin que la entrega se concrete por razones ajenas a su dominio, por ejemplo falta de espacio en el buzón del despacho, bloqueos del sistema, etc., mal haría la administración de justicia en sancionarlo con base hechos de los cuales no tuvo control ni injerencia, por la necesaria aplicación del principio ad impossibilia nemo tenetur.(negrilla y subraya del texto).

(...) En conclusión, cuandoquiera que las condiciones específicas del asunto reflejen que a pesar de la diligencia empleada por la parte para «enviar» sus misivas tempestiva y correctamente, no se logre el cometido por cuestiones propias del sistema al momento de la recepción que no le son atribuibles, se impone una mirada reflexiva del iudex en orden a determinar si la ruptura en la «comunicación» puede o no representar una consecuencia adversa para el remitente. Máxime cuando el servidor web ni siquiera avisó al interesado de tal deficiencia (CSJ, STC8584-2020, 15 oct., 2020-02660-00).

Así las cosas, ante la situación particular del caso, le era dable al juzgador, previo a decidir lo pertinente, determinar si existió alguna falla técnica y, de ser así, establecer si dicha causa que frustró la recepción de manera oportuna del correo electrónico era por causas extrañas al remitente o no, lo cual, se itera, debe estar debidamente comprobado.

Tal postura fue replicada mediante sentencia STC3980-2023 según la cual existían eventos en los que era forzoso determinar la efectiva entrega de un mensaje de correo electrónico destinado a una cuenta institucional de una sede judicial, en aras de no transgredirse garantías fundamentales.

Ahora, NO desconoce la Sala la alternativa que bridó el despacho al remitir el correo, cuando le indicó a la parte llamada a juicio, que tenía posibilidad de asistir personalmente al despacho para grabar en CD los archivos que no pudiese visualizar. Ello deja entrever que pese a adjuntarse en el correo, existen situaciones de diversa índole que impiden abrirlos y acceder a la información que contienen. Pero al margen de ello, otra es la formalidad señalada en la norma legal que NO es dable desatender, toda vez que artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 avala la notificación personal a través de un mensaje de datos a la dirección electrónica, pero con el envío de la providencia respectiva, en compañía de los anexos que deban entregarse. Su omisión impide que el acto procesal de notificación cumpla su finalidad, por la llana razón que la parte NO se

está enterando de la providencia, al margen que tuviera algunos memoriales que con antelación le había remitido el apoderado del demandante.

Así las cosas, dable es concluir, para el caso objeto de estudio, que **la notificación NO se practicó en legal forma**, y se presenta, como lo diría Devis Echandía¹, una enfermedad en el acto, de ahí que el remedio adecuado implica revocar la decisión a través de la cual el juzgado dio por no contestada la demanda y en su lugar reactivar el plazo legal para que EPM ESP presente escrito de contestación y sus correspondientes anexos, al correo del juzgado de origen, término para contestar que habrá de contabilizarse a partir de la ejecutoria de esta providencia. Vencido el mismo se continuará con el trámite pertinente, oportunidad en la que el juzgado determinará, sólo si el escrito se presenta oportunamente, si es dable dar por contestada la demanda, o lo devolverá si ha de subsanarse alguna falencia.

Ello por cuanto innegable resulta que actualmente la parte resistente tiene acceso al expediente contentivo del proceso ordinario, incluso el link del mismo está inserto en el encabezado de esta providencia, tornándose inocuo ordenar la entrega de la notificación por aviso a entidades públicas, dado que la misma ya se envió y la discusión únicamente se fincó en la imposibilidad de acceder a los anexos, obstáculo superado.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la decisión proferida el 22 de febrero de 2023 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín a través de la cual dio por no contestada la demanda a **EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P** dentro del proceso ordinario laboral instaurado en su contra el señor **MANUEL JOSE ORTIZ VALENCIA**, demanda impetrada además contra CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A, CAMARGO CORREA INFRA LTDA. SUCURSAL COLOMBIA, y CONINSA RAMON H. S.A, trámite al cual fue vinculado el CONSORCIO CCC ITUANGO.

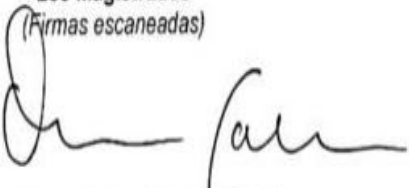
¹ En su obra *Nociones Generales del Derecho Procesal Civil* (2009, Editorial Temis, pág. 807) considera que sólo se llega al extremo de eliminar la actuación defectuosa cuando por otro camino es imposible obtener el mismo resultado y se trata de un *vicio* esencial.

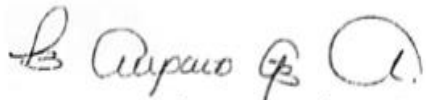
SEGUNDO: en su lugar se REACTIVA el plazo legal para que EPM ESP presente escrito de contestación con sus correspondientes anexos, al correo electrónico del juzgado de origen, término para contestar que habrá de contabilizarse a partir de la ejecutoria de esta providencia. Vencido el mismo se continuará con el trámite pertinente del proceso ordinario laboral, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


TERCERO: sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 068 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 22 DE ABRIL DE 2024

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>